

INTRODUCCIÓN: GLOBALIZACIÓN E INMIGRACIÓN

La inmigración aparece y se nos presenta como una realidad descontextualizada, sin historia, sin causas ni explicaciones. Sin embargo, millones de personas se ven obligadas a irse de sus lugares de origen para poder sobrevivir; entre ellas, las que cada día se lanzan al Estrecho con altas posibilidades de encontrar la muerte. Pensamos que esta realidad exige un análisis profundo y comprometido, que nos ayudará a entender la inmigración como uno de los efectos más violentos de la globalización capitalista a escala planetaria.

Este libro nace con la intención de hacer visible una realidad de explotación e inseguridad a través del relato de un inmigrante sin papeles. Al hilo de su experiencia mostraremos que los ejemplos de explotación no se reducen a los invernaderos de El Ejido, sino que su extensión territorial y sectorial es cada vez mayor. Este artículo es fruto de la reflexión de un pequeño grupo de debate y en ella se dialoga con la historia particular de Marco Valle para ponerla en relación con procesos sociales más generales.

El protagonista de este libro, Marco, sale de Argentina en julio de 2002. No es un caso aislado. Decenas de miles de argentinos y argentinas se han ido de su país en los últimos cinco años como consecuencia de la crisis social y económica. Por ello, iniciamos este artículo con un acercamiento a las causas de la crisis argentina, lo que nos permitirá entender procesos y relaciones similares en otros países de América Latina y, en general, de las periferias.¹

¹ Existen varios nombres para referirse a los países empobrecidos. «Países en vías de desarrollo» o «países subdesarrollados» parece postular como modelo de desarrollo el seguido por los países ricos. «Países del Sur» obvia el hecho de que la pobreza se concentra hoy también en países del Este situados en el hemisferio Norte. Por ello, empleamos la terminología centro-periferias: esta distinción no alude al hecho de que los países occidentales sean el «centro» del mundo, sino a que el subdesarrollo capitalista de los países «periféricos» está determinado por el tipo de desarrollo de las economías del «centro».

Este recorrido nos ayudará a enfrentarnos con la situación de las personas inmigrantes en el Estado español, la política migratoria y la forma en que el discurso dominante describe esta realidad. Finalmente, trataremos de relacionar las diferentes partes del texto para establecer la conexión entre los fenómenos migratorios y la globalización económica.

LA CRISIS ARGENTINA

En diciembre de 2001, la situación económica y social de Argentina se caracteriza por altísimas tasas de desempleo y subempleo. Más de la mitad de la población vive en la pobreza y dos de cada tres menores crecen en hogares pobres, mientras el cuarenta por ciento de la población activa está desempleada o subempleada. Estos porcentajes contrastan con el hecho de que Argentina sea un país exportador neto de productos alimenticios² y posea una balanza comercial positiva. Además, se asiste a una desindustrialización galopante a partir de finales de los años setenta, tras una época de desarrollo industrial relativamente próspero.

Esta realidad contiene elementos contradictorios que requieren explicación. Para indagar en sus causas, es preciso remontarse a la época de la más reciente dictadura argentina (1976-1983), que implanta en el país una política económica de corte neoliberal. Esa implantación tiene como condición la sangrienta represión de los movimientos de izquierda, con el asesinato sistemático de miles de activistas y dirigentes.

Con esta política comienza el endeudamiento masivo de la economía argentina: entre el inicio de la dictadura y el año 2001, la deuda externa se multiplica por veinte, pasando de 8.000 a 160.000 millones de dólares. Una parte de esa deuda la contrae el Estado argentino para financiar sus gastos policiales y militares y obtener reservas de divisas extranjeras. Sin embargo, la mayor parte la

² Es decir, exporta más productos alimenticios de los que importa.

ocasiona el endeudamiento privado: las grandes empresas, particularmente las filiales argentinas de las multinacionales, son animadas a endeudarse. A partir de 1981, la mayor parte de la deuda privada es asumida por el Estado, como exigían los países prestamistas y el Fondo Monetario Internacional (FMI).³ Para pagar los intereses de la deuda, el Estado pide nuevos préstamos.

Paralelamente, comienza una política de apertura financiera: una nueva ley promueve la inversión extranjera, la concesión de préstamos y la adquisición de empresas argentinas por parte de multinacionales. Estos procesos se acompañan de un descenso generalizado de salarios, posible en un contexto de represión masiva. Al mismo tiempo, se inicia una dinámica, secundada por los gobiernos sucesivos, de privatización de empresas y servicios públicos, entregados a precio de saldo a multinacionales, estadounidenses y españolas en su mayor parte. La privatización, justificada en términos de eficiencia, permite al gobierno obtener dinero para pagar los intereses de la deuda externa.

Tras la dictadura, los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Meném continúan y profundizan en esta política económica. Para frenar la caída del peso argentino frente al dólar, en 1991 se aprueba una ley que liga el peso a la divisa estadounidense; se impide la devaluación del peso, cambiándose un peso invariablemente por un dólar. En contrapartida, la cantidad de pesos que imprima el Banco Central argentino debe corresponder a la cantidad de dólares que entre en el país. Los mecanismos para lograr la entrada de dólares son más privatizaciones y nuevos préstamos.⁴

³ El Fondo Monetario Internacional fue creado en el año 1944 junto con el Banco Mundial, con el objetivo de asegurar la estabilidad monetaria internacional y garantizar el equilibrio de la balanza de pagos de los países. Está actualmente compuesto por 184 países, que tienen una capacidad de decisión proporcional a la cantidad de dinero que aportan. Esto hace que imperen siempre las decisiones de los países ricos, especialmente de Estados Unidos.

⁴ Se trata de que entren en el país más dólares de los que salen. Puesto que las compras que Argentina realiza en el extranjero se pagan en dólares, hay que lograr una entrada de divisa que compense estas salidas y que además arroje un saldo positivo. Las multinacionales compran en dólares las empresas argentinas privatizadas.

El FMI exige la sustitución de productos nacionales por importaciones para «sanear» la economía, con el argumento de que los productos importados tienen un coste menor. Este proceso deteriora la balanza comercial argentina. Al mismo tiempo, un treinta por ciento de la capacidad industrial del país permanece inactiva. Estos dos elementos y el peso creciente de la deuda producen una fortísima crisis económica.⁵

En la primera semana de diciembre de 2001, el FMI retira un préstamo de 1.300 millones de dólares para pagar intereses de la deuda por considerar que el presidente Fernando de la Rúa no está reduciendo suficientemente el gasto público. El gobierno se embarca en reducciones mayores de gasto, congelaciones de salario y, finalmente, inmoviliza las cuentas bancarias de los argentinos, limitando las retiradas de dinero a 250 dólares semanales (el llamado *corralito*) y remunerando con un tipo de interés simbólico ese ahorro forzoso.⁶

Las protestas que desencadena esta medida, en un contexto de corrupción política generalizada y un enorme poder de las burocracias políticas locales, inician la mayor revuelta popular que ha conocido Argentina en el último cuarto de siglo.⁷ Dicha revuelta la protagonizan amplios sectores de la población y se manifiesta de múltiples formas: movilizaciones piqueteras (cortes de ruta, realizados en su mayor parte por personas en paro), ocupación de fábricas, cacerolazos, socialización de alimentos en grandes hipermercados.

⁵ Se puede entender fácilmente la crisis asemejando la economía del país a la de una familia en la que los ingresos se redujesen (menos producción local), los gastos aumentasen (más importaciones) y se tuviera que pagar una cantidad cada vez mayor de intereses como consecuencia de los préstamos para financiar la diferencia entre ingresos y gastos de dicha familia.

⁶ El *corralito* afecta fundamentalmente a las clases medias. Las clases populares argentinas no poseen casi ahorros, y las clases altas, habiendo sido avisadas previamente de la medida, han sacado su dinero del país.

⁷ «Que se vayan todos», lema generado en las movilizaciones, permite múltiples lecturas. Una de ellas alude a la profunda desconfianza del pueblo argentino hacia una clase política corrupta y burocrática.

Las movilizaciones se encuentran con una brutal represión policial, con centenares de personas heridas y varias muertas.

La imagen que llegó a través de los medios de comunicación de estas movilizaciones las presentaba como actos vandálicos e incontrolados, haciendo hincapié en los «saqueos» de comercios. Sin embargo, las revueltas en Argentina han sido un laboratorio de experiencias de una enorme riqueza participativa. Autogestionadas y originadas desde la base, desbordaron ampliamente a las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda tradicional.

La amplia participación social en las movilizaciones no se explica sin la existencia, en Argentina y en toda América Latina, de fuertes redes y vínculos sociales que el mercado no ha logrado destruir y que no se conocen en los países del centro. En épocas de crisis económica estas redes se fortalecen, generando formas comunitarias de supervivencia (en Argentina, por ejemplo, las «ollas populares»), y constituyen el medio de participación política para amplias capas de la población. Sin estos vínculos, el número de personas que salieron del país como consecuencia de la crisis habría sido muy superior.

El proceso de implantación de una política económica neoliberal que ha sufrido Argentina en los últimos veinticinco años y sus consecuencias económicas y sociales son comunes a la gran mayoría de los países de América Latina. Por eso, es interesante detenerse en las conclusiones que se pueden extraer del análisis del caso argentino.

Argentina vive, entre los años diez y mediados de los setenta, una industrialización importante, fundamentalmente de bienes de consumo. Es una época en la que buena parte de la población se incorpora al trabajo asalariado; existe un cierto reparto de los frutos del crecimiento y una preocupación, más o menos decidida, de ligar el desarrollo capitalista a intereses nacionales y no yanquis. Sin embargo, el gran capital inicia a partir de los años setenta su ofensiva neoliberal. Con el objetivo de introducir a Argentina en un mercado mundial de nuevo cuño y abrirla a la entrada de las multinacionales, utiliza primero los instrumentos represivos de una dictadura aplaudida, adiestrada y financiada por Estados Unidos, y luego los

instrumentos de presión, de apariencia más presentable, de las instituciones comerciales y financieras internacionales. Veamos cuál ha sido el papel del FMI, la institución más influyente en la gestación y profundización de la crisis argentina.

Para asegurar el pago de la deuda, el Fondo ha obligado al país a aceptar sus *planes de ajuste estructural*, al igual que en otros muchos casos a lo largo de las últimas tres décadas. Estos planes configuran una realidad acorde con los intereses del gran capital y han constituido un factor esencial en la imposición de la globalización.

Como parte de las imposiciones del FMI, Argentina se ha visto obligada a abrirse al mercado mundial y a confiar a los mercados financieros el control de su moneda. No existe ninguna divisa en América Latina que resista la combinación de estos dos factores, que originan necesariamente un debilitamiento frente al dólar. Las instituciones monetario-financieras estadounidenses potencian este debilitamiento para aprovecharse de él imponiendo la dolarización⁸ de la economía. Este proceso refuerza la posición de la divisa estadounidense, acentuando así aún más la debilidad de las divisas nacionales.⁹

Otra de las imposiciones del FMI es la reducción del déficit público. En un contexto de menores ingresos fiscales,¹⁰ mayores gastos (militares y por el pago de intereses de la deuda) y necesidad de disponer de dólares, esa reducción implica necesariamente:

⁸ La dolarización puede ser directa si se da una sustitución de la moneda nacional por el dólar o indirecta cuando se ponen en una relación de cambio fija impidiendo que la moneda nacional fluctúe.

⁹ Que el dólar sea aceptado como medio de pago internacional permite que tenga un valor relativo muy alto frente a otras divisas. Este hecho, apoyado en la presencia militar estadounidense, es el que ha permitido el crecimiento de la economía norteamericana a pesar de sus desequilibrios comerciales y financieros.

¹⁰ La disminución de los ingresos fiscales obedece a varias razones: por un lado, la sustitución de productos nacionales por importados reduce el volumen de actividad económica, con lo que el Estado recauda una cantidad proporcionalmente menor; por otro, las políticas económicas neoliberales tienden a reducir la presión fiscal, gravándose con una fiscalidad más baja a las clases altas; además, como fruto de la apertura financiera, el capital argentino se invierte fuera del país, lo que reduce aún más los ingresos; finalmente, existe un fraude fiscal generalizado que el gobierno permite ampliamente.

- privatización de los servicios públicos y recortes drásticos en aquellos que permanecen en manos del Estado. Esos recortes en los servicios públicos degradan su calidad, utilizándose esta degradación como argumento para nuevas privatizaciones.
- venta de las empresas públicas, rentables o no, como forma de obtener divisa. El Estado, en muchas ocasiones, asume previamente la deuda de las empresas y las vende muy por debajo de su valor en todos los casos. El esquema seguido tras la privatización incluye: aumento de tarifas, reducción de plantilla y sustitución de trabajo fijo por precario. La ineficiencia se mantiene intacta en muchos casos, como ha ocurrido en la distribución eléctrica. Entre las compradoras mayoritarias en Argentina, al igual que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, están las multinacionales españolas (Repsol, Telefónica, Endesa, Iberia...). La clase empresarial española y los medios de comunicación a su servicio han aplaudido con fervor esta nueva colonización de América Latina por el capital español.

En este análisis encontramos factores comunes no sólo a muchos otros países de América Latina, sino también a los países del Centro, en los que también se dan privatizaciones, precarización, aumento del gasto militar, reducción de los gastos sociales... Países del centro en vías de desarrollo hacia el modelo de capitalismo periférico.

INMIGRACIÓN, TRABAJO PRECARIO Y POLÍTICAS REPRESIVAS

La crisis argentina obliga a miles de personas a abandonar su país, como ocurre en el caso de Marco. Pero la situación dramática en Argentina se reproduce a su llegada a Europa, supuesto paraíso occidental. Si la mayoría de inmigrantes decide salir de su país para librarse de la enorme desestructuración económica y social, su posición a la llegada, lejos de resolver sus problemas, se ve agravada por el des-

arraigo y por unas condiciones generalmente muy hostiles. La mayor parte trae consigo la responsabilidad de apoyar económicamente a quienes se han quedado en el país de origen. A todo ello se añade el endeudamiento personal para responder a los costes del viaje.

El relato de Marco, uno de los cientos de miles de inmigrantes sin papeles que viven en el Estado Español, nos muestra las diferentes dimensiones de su explotación y su inseguridad. La Ley de Extranjería y sus sucesivas reformas han supuesto que las posibilidades de regularización para más de medio millón de inmigrantes sean cada vez menores. Las posibilidades de presentar una oferta de trabajo que les permita el acceso a los papeles se van cerrando paulatinamente, a través, entre otras medidas, de las restricciones al Régimen General,¹¹ las trabas crecientes al reagrupamiento familiar y el fin de la exención de visado.¹² Por tanto, las personas sin papeles

¹¹ Hasta enero de 2002, las personas inmigrantes necesitaban que una empresa o particular realizase un oferta de trabajo a su nombre, condicionada a que no existieran trabajadores nacionales dispuestos a cubrir ese puesto de trabajo. Una vez realizada la oferta, debía ser registrada en la Delegación de Gobierno, pudiendo llegar a demorarse unos tres meses o más su resolución. Cuando era aprobada, la persona debía regresar a su país para poder conseguir su visado y entrar nuevamente y de forma legal en el Estado español. Esta era la forma de acceder a un empleo a través del Régimen General.

A partir de enero éste se cierra salvo para casos concretos especificados en el desarrollo de la Ley de Extranjería, y se abre el modelo de Contingente, que establece el número de personas extranjeras que pueden trabajar en España pero que son seleccionadas en sus países de origen. Las organizaciones empresariales españolas deben solicitar un número determinado de trabajadores y trabajadoras en las embajadas españolas de determinados países a través de ofertas de empleo genéricas. Los resultados del modelo de Contingente han sido un fracaso; por poner un ejemplo, en Asturias se estableció para el 2002 un contingente de 45 personas, de las que sólo siete fueron solicitadas.

En la nueva Reforma de la Ley se consagra este modelo. La inclusión, a petición del PSOE, del visado por tres meses para búsqueda de empleo, es una medida para la galería. Sólo los hijos y nietos de españoles o trabajadores del servicio doméstico pueden acceder a este visado. Además, esta medida establece que quienes no se marchen en el caso de que no encuentren empleo en ese plazo, no podrán obtener autorización para trabajar durante dos años.

En el año 2003 se abre de nuevo el Régimen General, pero en condiciones mucho más restrictivas que el anterior a enero de 2002. El nuevo Régimen General exige que el Inem acredite que no se han encontrado personas desempleadas para el puesto de trabajo, a través de la gestión realizada por la oficina pública de empleo de la zona.

se ven abocadas a trabajar en la economía sumergida,¹³ en un círculo vicioso de inseguridad jurídica y precariedad laboral.

Marco Valle nos describe unas condiciones de trabajo caracterizadas por un trato vejatorio y racista, salarios de hambre, sin contrato ni seguridad social, con horarios interminables y condiciones impuestas por la empresa. En muchas ocasiones, como podremos leer en su relato, las condiciones incluyen el control de la alimentación y la vivienda. La empresa se aprovecha también aquí de la vulnerabilidad de las trabajadoras y los trabajadores para ejercer su poder. En esta situación los trabajadores inmigrantes tienen un escaso o nulo poder de negociación de sus condiciones de trabajo.

La explotación laboral de las personas inmigrantes sin papeles se apoya en la violación sistemática de sus derechos sociales y políticos. Se les niegan los derechos de asociación, reunión y manifestación; como no tienen contrato, tampoco tienen derechos sindicales o de huelga. La nueva reforma de la Ley de Extranjería (consensuada por el PP y el PSOE) insiste en una política policial y establece nuevas herramientas de represión y precarización. Entre otras medidas, permite a la policía el acceso a los datos del padrón municipal¹⁴ y exige a las empresas de transporte que asuman papeles de control fronterizo.¹⁵ Las obligaciones exigidas a estas empresas dificultarán también las posibilidades de acceso al Estado español de quienes se ven obligados a salir de su país por motivaciones políticas. En

¹² La exención de visado exime de viajar al país de origen para conseguirlo, antes de volver al Estado español.

¹³ A nivel estatal, el principal sector es el hortofrutícola; en el caso de Asturias, la hostelería, el sector forestal, el trabajo doméstico, la construcción y el reparto de publicidad.

¹⁴ De esta forma, los inmigrantes sin papeles tienen dos opciones: poner sus datos a disposición de la policía para que se les inicie un procedimiento de expulsión en el momento que Delegación de Gobierno lo considere oportuno; o no empadronarse, lo que implica dejar de tener acceso a servicios sociales de atención primaria, de salud y escolarización (para los que se requiere empadronamiento) y perder una de las pocas formas que tienen de demostrar su arraigo en el lugar donde viven (en caso de un procedimiento de expulsión o de una solicitud de regularización).

¹⁵ Las compañías de transporte estarán obligadas a facilitar a las autoridades españolas datos sobre sus pasajeros y sobre los billetes de vuelta no utilizados. Además, ten

caso de resolución negativa de su demanda de asilo, es la empresa de transporte la que está obligada a cubrir sus gastos y su repatriación. Por ello, las propias empresas serán un primer filtro, al impedir el viaje de las personas cuyo asilo no esté asegurado. Una resolución negativa es habitual en nuestro estado, que cada vez concede el asilo en menos ocasiones.¹⁶

A través de los medios de comunicación de masas, el discurso dominante justifica esta situación de cierre de fronteras y de represión mediante diversos argumentos, que obvian toda referencia a causas económicas y políticas. Por una parte, sobredimensiona la inmigración, cuando sólo entre un tres y un cuatro por ciento de la población es inmigrante.¹⁷ Por otro lado, asocia inmigración a delincuencia y terrorismo. Si ya se vinculaba de manera sistemática inmigración y delincuencia, desde el 11-S asistimos a la explosión del discurso del terrorismo, que en un primer momento se centra en el ataque racista frente a lo árabe y que, a medida que avanza en extensión y potencia, salpica de lleno a toda opción racial, cultural o política que se aparta de la norma occidental, «democrática» y globalizadora.¹⁸ En concreto, y apoyándose en la Ley de Extranjería, se reprime a los colectivos sociales y a las personas que se comprometen y solidarizan con las situaciones que sufre la población inmigrante.

A la vez que se exagera la dimensión de la inmigración, y de manera aparentemente contradictoria con este discurso, se niega la

drán que hacerse cargo de las personas a las que se deniegue la entrada por deficiencias en la documentación necesaria, así como devolverlas a su país de origen o a cualquier otro Estado que las admita.

¹⁶ En el año 2002, se realizaron 6.227 peticiones de asilo, de las que 4.131 fueron rechazadas y 1572 aceptadas. Se produjeron 68 renunciaciones. (S.O.S. Racismo, *Informe Anual 2003 sobre el racismo en el Estado español*).

¹⁷ En el Estado español, viven unas 900.000 personas no comunitarias. Estos datos no recogen la inmigración llamada «ilegal»: entre 500.000 y 700.000 personas.

¹⁸ En la portada de *El País* del 20 de octubre de 2003 encontramos un ejemplo de esta identificación: la noticia de un plan de España y Francia contra la inmigración ilegal se funde con las medidas contra el terrorismo. En el interior (p. 17), se funden inmigración ilegal, ETA y la amenaza de Al Qaeda.

existencia de un creciente número de inmigrantes sin papeles en el Estado español.¹⁹ Una de las líneas argumentales más utilizadas es la de criminalizar la inmigración *illegal*, asociándola casi en exclusiva a mafias. De esa forma se trata también de reducir el problema a una cuestión residual. Al hacer invisible al colectivo de inmigrantes sin papeles, se impulsan los grandes beneficios derivados de su explotación masiva.

Lo que se oculta detrás del discurso dominante sobre la inmigración es la necesidad de responder a dos aspectos en cierta medida contradictorios: por un lado, el papel que desempeña el Estado español como muralla de contención de la Unión Europea frente a la entrada de inmigrantes (tal y como señala el tratado de Schengen); y, por otro, la necesidad de alimentar el sector más precarizado del mercado laboral con inmigrantes (con y sin papeles), que son recibidos como fuerza de trabajo dispuesta a aceptar condiciones de semiesclavitud. Así se logra también amenazar a los trabajadores y las trabajadoras autóctonos/as, presionados por las condiciones a las que se ve abocada la población inmigrante. Esta precarización generalizada se denomina flexibilización del mercado de trabajo en la retórica neoliberal.

Mientras se acaba de manera acelerada con derechos laborales, sociales y políticos, muchos trabajadores piensan que el origen del problema es la presencia de los inmigrantes, que «nos quitan los trabajos». Sin embargo, el que el mercado de trabajo haya sufrido una flexibilización y precarización masivas no es consecuencia de la presencia de inmigrantes, sino que forma parte de una ofensiva del capital para obtener mayores beneficios mediante la explotación del trabajo. Esa ofensiva, que se inicia en Europa en la década de los setenta, tiene en el desmantelamiento del Estado del Bienestar uno de sus momentos decisivos. Su objetivo es configurar una realidad

¹⁹ El 3 de octubre de 2003, en una noticia recogida en *El País*, el candidato del PP a las elecciones generales de 2004, Mariano Rajoy, cuestionaba las estimaciones, ya a la baja, de CC OO y UGT de 400.000 inmigrantes sin papeles; negando su cuantía real, se justifica la falta de mecanismos de regularización para este colectivo.

INTRODUCCIÓN: GLOBALIZACIÓN E INMIGRACIÓN

que asegure grandes beneficios al capital, a costa de la inseguridad masiva en el empleo. Para lograrlo, es fundamental que la población se vea obligada a aceptar cualquier trabajo en cualesquiera condiciones. La presencia de trabajadores con un escaso poder de negociación es una condición para desarrollar esta política laboral. Entre ellos, los trabajadores inmigrantes, especialmente quienes carecen de papeles, que se ven obligados a aceptar los trabajos y las condiciones laborales que nadie más está dispuesto a aceptar.

GLOBALIZACIÓN Y ANTIGLOBALIZACIÓN. CONTRA LA «LIBRE MOVILIDAD» DEL MERCADO Y LA LEY DE EXTRANJERÍA

La globalización es la extensión y consolidación del sistema capitalista a escala planetaria. En un contexto en el que, aún, el 80% de la población mundial cultiva sus propios alimentos, estos procesos implican destruir las economías campesinas que producen para subsistir y no para vender. Así se rompen las formas de supervivencia y las redes de pertenencia social y cultural de millones de personas, que pasan a depender de la lógica del mercado. En las sociedades capitalistas, el consumo y el empleo aparecen así como formas principales de sociabilidad. Todo este proceso, cuya violencia no tiene precedentes en la historia, aparece como la quintaesencia del desarrollo, la libertad y la democracia.

El capitalismo oculta su historia, borra las huellas de su origen y presenta al mercado como un hecho natural: parece como si éste hubiera existido siempre, como resultado de una psicología de las personas que les mueve a perseguir sus intereses por encima de todo lo demás. Sin embargo, el mercado mundial es una realidad reciente, y amplias áreas geográficas y sociales se hallan aún en mayor o menor medida ajenas a él. Su constante expansión es una necesidad para la supervivencia del capital multinacional, que no repara en usar todos los instrumentos de presión económica, financiera, monetaria, política y militar a su alcance.

Esta extensión del mercado mundial constituye la esencia misma de la globalización.

El hecho de que la globalización se presente como lo que no es, como la consolidación de la libertad, el desarrollo y la democracia, explica el consenso social en torno a ella. Sólo así se entiende el mantenimiento de esta lógica destructiva. De este modo, la mayor parte de los habitantes del centro basan su bienestar en la capacidad de consumo, sin atender a las consecuencias sociales y medioambientales de su modelo de producción y vida. Así refuerzan, aun sin quererlo, la eliminación de las formas de vida tradicionales en las periferias. El discurso superficial sobre la inmigración del que hablamos al principio del artículo, que desvincula el fenómeno de sus causas, contribuye a mantener esta subjetividad despreocupada de consecuencias. El consenso en torno al desarrollo y el progreso penetra también con fuerza en los países de las periferias, favoreciendo la atracción de personas hacia los países del centro con la promesa del bienestar. Esta construcción de una subjetividad individualista, adoptada por muchas personas inmigrantes, implica su integración total en la lógica del mercado.

En síntesis, lo que no recoge el discurso dominante es, por un lado, la destrucción de las economías de los países de las periferias; por otro, la necesidad en el centro de mano de obra barata y con un escaso poder de negociación, dispuesta a aceptar cualquier trabajo y a soportar condiciones penosas. Ambas cuestiones están íntimamente ligadas a la globalización, por lo que la inmigración aparece ahora como una de sus características intrínsecas, como un hecho indisoluble de ella.

Oponerse a la globalización exige responder a ambas cuestiones. Por una parte, clarificar que no es libertad la obligación de irse del país de origen para sobrevivir, que la libertad de la globalización es la que concibe a los seres humanos como mercancías destinadas a trabajar en el mercado precario. Así, hay que matizar la exigencia de libre movilidad para las personas teniendo en cuenta cuáles son las causas estructurales de los procesos migratorios.

INTRODUCCIÓN: GLOBALIZACIÓN E INMIGRACIÓN

La exigencia de una vida justa y digna en los países de origen debe complementarse con la reivindicación de la regularización y la igualdad de derechos para las personas inmigrantes, como forma de evitar su precarización masiva y de enfrentarse a la política represiva del Estado español y la Unión Europea. Ambas exigencias tienen que formar parte de un discurso antiglobalización que, enriquecido y fortalecido por la participación y el encuentro con las personas inmigrantes y todo su bagaje cultural y político, relacione los violentos efectos de la globalización en nuestras realidades locales con sus dinámicas planetarias.

Grupo de Inmigración

cambalach

El autor de este libro es un inmigrante sin papeles. En nuestra democracia de mercado, sólo existe como persona para trabajar en la economía sumergida. Como él, más de medio millón de personas en el Estado español carecen de derechos sociales, laborales y políticos. Sobre ellos pesa la amenaza permanente de la expulsión del país.

Esta situación explica el hecho de que algunos nombres propios utilizados en el texto hayan sido modificados para evitar la represión hacia su autor. Paradójicamente, gracias a la Ley de Extranjería, quienes tienen que ocultarse son las personas explotadas, mientras las empresas se aprovechan del trabajo precario y la contratación ilegal para aumentar sus beneficios.

